

DERECHO A LA IDENTIDAD

Por Gabriel A Rolandi

La evolución en la protección de las garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional constituye una constante jurídica que va a la zaga de la jurisprudencia de los tribunales del país que va moldeando la interpretación de aquellos a partir de una reformulación y afianzamiento en los criterios de aplicación. Como en algún momento afirmó Charles Evans Hughes: *“Vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”*.

Así, el constitucionalismo clásico del Siglo XVIII tuvo como uno de sus objetivos medulares limitar el poder del Estado y, en consecuencia, brindar mayores garantías a los individuos. Prueba de este cambio de paradigma fue también la evolución de la noción de Estado-Policía a Estado como gestor del bien común.

A tal efecto, se incluyó dentro de cada Constitución una parte dogmática que contiene los principales derechos individuales de las personas. Así, estas declaraciones de derechos, como primer lineamiento para los grandes programas de gobierno, ya estaban presentes en las primeras constituciones, inspiradas en las Colonias Inglesas de Norteamérica y, luego, en la de los Estados Unidos de Norteamérica. Así, por ejemplo, en la Declaración de Virginia y Declaración de la Independencia de 1776. Luego, la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano ocurrida en Francia (1789). A partir de allí, todas las constituciones incluyeron una parte dogmática donde se declararon los derechos del Hombre.

En nuestro país, la declaración de los derechos se encuentra en la primera parte de nuestra Constitución, en los artículos 1 a 43.

Esta parte, consta de dos capítulos, teniendo en cuenta la reforma introducida en 1994. En efecto, la primera parte (arts. 1 a 35) denominado “Declaraciones, derechos y garantías”; y la segunda, a propósito de la reforma

constitucional ya referida, denominada “Nuevos derechos y garantías” (arts. 36 a 45).

En este punto, resulta preciso aclarar que las *declaraciones* son los criterios adoptados por los convencionales constituyentes respecto a los ejes políticos fundamentales. Así, si toda Constitución implica un programa de gobierno, las declaraciones son aquellas luces que iluminan el camino de este programa.

Por su parte, los *derechos*, consisten en facultades reconocidas por la Constitución a las personas o grupos sociales, cuyo ejercicio dependerá de su carácter operativo o programático y de los criterios de legitimación aplicables.

Estos derechos, a su vez, pueden ser implícitos o explícitos, dependiendo de su enumeración expresa o no en el texto constitucional. Respecto de los derechos implícitos, surgen del art. 33 que, en lo que aquí importa, expresamente precisa que aquellos derechos y garantías expresadas no pueden entenderse como negatorias de otros que nacen de la soberanía y de la forma republicana de gobierno. Así, el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad del hombre.

A su turno, las garantías constituyen mecanismos creados por la propia Constitución para que los titulares de derechos fundamentales puedan ejercerlos. -

Con posterioridad a la reforma Constitucional del año 1994, se le otorga jerarquía Constitucional a los Tratados Internacionales incluidos en el Art 75 inc 22 de la C.N.- En consecuencia, además de los derechos enumerados en la primera parte, cabe tener en cuenta los derechos que surgen de estos tratados.

En este punto, cabe advertir que la inclusión referida importó, en rigor, la asunción de un nuevo sistema de derechos: en particular, el nuevo sistema de derechos humanos. Nos referimos a un nuevo sistema porque los instrumentos internacionales no sólo mencionan los nuevos derechos, sino

que también crean nuevos organismos internacionales encargados de interpretar los alcances y modalidades de aquellos nuevos derechos reconocidos.

De esta manera, este concepto de inclusión sistémica, permite abordar la cuestión de los derechos reconocidos en estos instrumentos internacionales en su real dimensión que, por cierto, se revela como mucho más dinámica.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD COMO UN DERECHO HUMANO, EL ROL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS Y EL DERECHO A LA IGUALDAD

1. Derechos de primera, segunda y tercera generación.

La doctrina ha efectuado una clasificación de los derechos, a partir del orden cronológico en el que aquellos han sido reconocidos. Es importante precisar, entonces, que ello no traduce una jerarquía de derechos, sino más bien el momento en el cual han ido surgiendo a partir del reconocimiento en distintos instrumentos jurídicos.

Así, se encuentran los derechos de primera, de segunda y de tercera generación.

a) Derechos de primera generación:

Son aquellos derechos civiles y políticos que fueron reconocidos durante la etapa del constitucionalismo clásico. Pretenden asegurar la libertad de las personas, sin perjuicio de que su ejercicio se regule a partir de una legislación razonable (art. 28 CN). Así, los contenidos en el art. 14 de la CN (vgr. derecho a trabajar, a enseñar y aprender, etc.).

b) Derechos de segunda generación:

Son aquellos derechos sociales, económicos y culturales, que surgieron en la etapa del constitucionalismo social en la segunda etapa del siglo XX. Como consecuencia de la creciente industrialización y ante las secuelas de las guerras mundiales, estos derechos procuran garantizar mayor igualdad entre las personas. En nuestra Constitución, se encuentran previstos en el art. 14 bis, incorporado por la reforma de 1957.

c) Derechos de tercera generación:

Son aquellos denominados derechos de incidencia colectiva, incorporados en las constituciones más modernas. Así, nuestra Carta Magna los prevé en el capítulo relativo a los Nuevos Derechos y Garantías, entre los que se destacan el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, derechos de los usuarios y consumidores, derechos a una mejor calidad de vida y, en lo que aquí importa, el derecho a la identidad.

A su turno, conjuntamente con el derecho a la Identidad, no obstante su autonomía, interactúan otros derechos como **el Derecho al Desarrollo de la Personalidad, el Derecho a la Libertad y a la Igualdad.**

En particular, el derecho a la identidad de la niñez se encuentra previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño (CSDN), en sus artículos 7 y 8, en la cual **se reconoce la inscripción del niño y de la niña inmediatamente después de su nacimiento**, es decir el derecho al nombre y la creación por parte de los Estados de las instituciones respectivas para hacer efectivo el mismo.

Sin pretender sobreabundar respecto del marco normativo, valga recordar aquí lo establecido por el art. 8 de la citada Convención, en cuya virtud los Estados se comprometen a:

1. *Respetar el derecho del niño a preservar su identidad..*
2. *Cuando el niño sea privado de alguno de los elementos de su identidad o todos ellos, el Estado es el principal garante de prestar asistencia y protección con el fin de reestablecer el derecho vulnerado.*

Integran también el derecho a la identidad, el nombre, la nacionalidad, las relaciones de familia, en tanto constituyen un mínimo necesario para reconocerla en tanto ella resulta crítica para definir la personalidad de un individuo

A su turno, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, como legislación especializada, en el Título III de los Derechos al Desarrollo,

define la personalidad como: *“ese conjunto de características psíquicas de una persona que lo determinan a actuar de cierta forma ante una circunstancia, esos patrones de actitudes, pensamientos, sentimientos y conductas que caracterizan a una persona”*. Como observamos, este concepto tiene una fuerte vinculación con la construcción de la identidad.

En este sentido, el artículo 73 LEPINA, regula explícitamente el Derecho a la Identidad y comprende:

1. Derecho a una identificación.
2. Derecho al conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un emplazamiento familiar.
3. Derecho a una sana y libre formación de la identidad personal
4. Derecho a transformar la identidad personal
5. Derecho al respeto de las diferencias personales.
6. Derecho a no ser engañados sobre la identidad personal ajena.
7. Derecho a actuar según las convicciones personales.
8. Derecho a proyectar la identidad personal en obras y creaciones.

No obstante, la identificación es parte de la identidad, el art. 74 LEPINA contempla el “Derecho a la Identificación”, como ese acto de identificar y esa prueba de identidad, es decir la inscripción inmediata en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas, una vez ocurrido el nacimiento del niño o la niña.

La inscripción deber ser oportuna, pero además el Estado debe garantizar que se realice con facilidad, sin importar la condición social de los progenitores.

2. El bloque normativo y el rol del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en la inscripción del nacimiento

En la República Argentina la actuación del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas se encuentra regida por la ley 26.413.

Esta ley, en lo que aquí importa, establece que *“La inscripción de los nacimientos con intervención de los progenitores deberá efectuarse dentro del plazo máximo de CUARENTA (40) días corridos contados desde el día del nacimiento. Vencido dicho plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo máximo de VEINTE (20) días corridos. En el supuesto de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médico-asistenciales sin intervención de profesional médico, la dirección general podrá por disposición o resolución motivada, admitir la inscripción cuando existan causas justificadas fehacientemente, hasta el plazo máximo de UN (1) año, previa intervención del Ministerio Público.”* (art. 28).

Por su parte, el art. 29 dispone que ***“Vencidos los plazos indicados en el artículo precedente, la inscripción sólo podrá efectuarse por resolución judicial para cuyo dictado los jueces deberán cumplimentar los siguientes recaudos: a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el registro civil del lugar de nacimiento; b) Certificado expedido por médico oficial en el que se determine la edad y la fecha presunta de nacimiento; c) Informe del Registro Nacional de las Personas, en su caso, donde conste si la persona cuyo nacimiento se pretende inscribir está o no identificada, matriculada o enrolada; determinándose mediante qué instrumento se justificó su nacimiento; d) Declaración bajo juramento de DOS (2) testigos respecto del lugar y fecha de nacimiento y el nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente; e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir en cada caso.”***

A su turno, la ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, establece, en lo que aquí interesa que: *“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de*

sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil...” (art. 11). Además, señala que: “Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 24.540. Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los Organismos del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tomada especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley. Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, que no hayan sido inscriptos oportunamente.” (art. 12)

Por último el art. 13 de la misma ley garantiza el derecho a la documentación, señalando que: *“Las niñas, niños, adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en la Ley N° 24.54.”*

En sentido análogo al expresado por la ley 26.413 se refieren los arts. 1 a 4 de la Disposición 18-DGRC-2018 que aprobó el reglamento del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires.

Quiere ello decir que, en principio, la inscripción del nacido debe efectuarse dentro de los plazos previstos por la ley o bien, vencidos éstos, sólo es posible mediante una decisión judicial.

La norma no da razón de por qué el trámite debe ser judicial, a poco de advertir que los requisitos que deben ser cumplidos ante el juez, también podrían hacerse valer ante el Registro Civil.

Pareciera así quedar en evidencia que las competencias ejercidas por el Registro Civil resultan resabios de aquellas funciones que otrora ejerciera la justicia quien, debiendo intervenir por definición en casos de conflicto, decidía también cuestiones donde no existe controversia alguna.

Es del caso señalar que la obligada intervención del juez determina la puesta en funcionamiento de todo un sistema que permite finalmente obtener la sentencia de inscripción.

Probablemente hayan sido esos algunos de los motivos que determinaron que el Poder Ejecutivo, con una serie de decretos que fueron prorrogándose en el tiempo, autorizara la inscripción en sede administrativa de los menores hasta los doce años de edad.

En efecto, el decreto 222/18 prorrogó por un año (a su vez prorrogable por un año más) la dispensa ya establecida por el decreto 160/17, autorizando la inscripción en sede administrativa de los menores de edad hasta los doce años.

Sin embargo, lo curioso de este decreto, fue que también prorrogó la excepción (también contenida en su anterior 160/17) hecha para el caso de los ciudadanos mayores de doce años de edad ***que residieran en el ámbito del territorio de la Nación y que acreditaran su pertenencia a pueblos indígenas.***

Que, como fundamento de dicha excepción (que, en definitiva, autoriza sine die la inscripción administrativa de quienes integren el grupo social referido), señaló que *“se han constatado numerosos casos de ciudadanos mayores de DOCE (12) años de edad pertenecientes a pueblos indígenas que no pueden acreditar su identidad mediante la presentación del correspondiente Documento Nacional, por carecer del mismo. Que garantizar la inscripción, registro y documentación de las personas no sólo importa hacer efectivos los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, sino también evitar la afectación de otros derechos de las personas originada en la falta de cumplimiento de dichos actos. Que la posesión del Documento Nacional de Identidad garantiza el pleno*

ejercicio de los derechos sociales, cívicos y políticos, tales como acceder a la escuela primaria, ser atendido en establecimientos de salud, transitar libremente, salir y entrar del país, trabajar, contraer matrimonio, reconocer hijos, elegir y ser elegido para ocupar cargos políticos, entre otros. Que, asimismo, la inscripción y documentación de todos los sectores de la sociedad, contribuye a la conformación de un registro de datos que refleje todo el potencial humano de la Nación, sin excepción ni discriminación...” (ver considerandos del decreto 222/18).

Varias son las reflexiones que se derivan del referido marco normativo, a propósito del rol que le cabe al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

En primer lugar, parece clara la intención del legislador –el Ejecutivo en este caso- de resguardar el derecho a la identidad de manera más eficiente; y esto se deriva, según el propio decreto, no judicializando el trámite.

En efecto, en sus considerandos, la propia norma señala: *“Que desde un aspecto normativo y valorativo, debe propenderse a la facilitación y remoción de obstáculos para la procedencia de la inscripción de nacimientos, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas, reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico...”*

Sin embargo, y más allá de lo notable que resulta el propio reconocimiento del legislador en cuanto a que la inscripción de los nacimientos resuelta por vía judicial constituye un obstáculo, resulta sorprendente el tratamiento diferenciado que depara respecto de los integrantes de pueblos originarios, tal como se ha referenciado en párrafos precedentes.

Ello suscita algunas reflexiones de cara a la discriminación positiva contenida en la norma, al tiempo que genera interrogantes ante la existencia de presupuestos de hecho análogos y la eventual vulneración del derecho a la igualdad.

En efecto, según el decreto, el fundamento que justifica el tratamiento diferenciado está dado por el siguiente argumento: *“se han constatado numerosos casos de ciudadanos mayores de DOCE (12) años de edad pertenecientes a pueblos indígenas que no pueden acreditar su identidad mediante la presentación del correspondiente Documento Nacional, por carecer del mismo.”*

De esta manera, la pregunta es obvia: ¿Qué ocurre con aquellos otros ciudadanos mayores de doce años que no pueden acreditar su identidad por carecer de Documento Nacional? ¿Acaso la no pertenencia al grupo de pueblos originarios importa una desigualdad en el acceso al derecho a la identidad?

Ello obliga a analizar el derecho a la igualdad y su configuración en el caso en examen a partir de una adecuada hermenéutica jurisprudencial.

3. El derecho de igualdad en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las denominadas “categorías sospechosas” en la Corte Suprema de los Estados Unidos

El artículo 16 de la Constitución Nacional consagra como principio general que todos los habitantes son iguales ante la ley. Reconoce como antecedente directo lo establecido por el art. 1 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que disponía *“los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden basarse en la utilidad social”*. En función de ello, la ley debe ser la misma para todos cuando premia o protege y cuando castiga.

Como señala Gelli, sostener que todos los habitantes son iguales ante la ley es un principio valioso pero incompleto, en tanto la igualdad, como tal,

requiere determinar qué se entiende por igual y qué criterios o pautas se emplean para igualar o diferenciar.¹

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene reiteradamente establecida su doctrina respecto a que la ley debe ser igual para los iguales en iguales circunstancias, habiendo examinado las categorías normativas. En ese sentido, y si bien naturalmente el derecho crea categorías (menores de edad, inocentes y culpables, solteros y casados, etc) será del caso advertir la denominada discriminación prejuiciosa que es aquella categoría basada en datos inadecuados que implica hostilidad contra un grupo de personas o individuos de esos grupos.

Así, ha señalado el Máximo Tribunal de la Nación, que el principio de igualdad que surge del art. 16 de la Constitución Nacional -y que, en general, se ha interpretado como principio de no discriminación en el sentido de que todas las personas deben ser tratadas de igual manera cuando estén en las mismas circunstancias- debe también ser considerado a la luz del art. 75 inciso 23 de la CN y de diversas disposiciones contenidas en los tratados con jerarquía constitucional que incorporan, por un lado, mecanismos de acciones positivas para favorecer a determinados grupos y, por el otro, delinean categorías sospechosas de discriminación, con el fin de garantizar la igualdad real de los habitantes.²

Asimismo, sostuvo que, en el marco que plantea la Constitución de 1994, la igualdad debe ser entendida no solo desde el punto de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo, considerando el contexto social en el que se aplican las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas que de ellas se derivan, y de qué modo impactan en los grupos desventajados, si es que efectivamente lo hacen. Todo lo cual conlleva la utilización de criterios de control de constitucionalidad más estrictos que aquel

¹ Gelli, María Angélica, *Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada*, La Ley, 2001, p. 126.

² CASTILLO, CARINA VIVIANA Y OTROS Y OTRO c/ PROVINCIA DE SALTA MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROV. DE SALTA s/AMPARO; CSJ 001870/2014/CS001, 12/12/2017.

generalmente utilizado para evaluar los casos desde el enfoque tradicional de la igualdad.³

En particular, señaló que la garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clases de personas, ni encierra indebido favor o privilegio, personal o de grupo.⁴

Es aquí donde cabe mirar la evolución que ha tenido la garantía de igualdad en la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo en cuenta que en aquel país, la igualdad ha sido un eje crítico en su evolución histórica, social y cultural.

La Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos establece, en lo que aquí interesa, que ningún Estado podrá negar a ninguna persona que se encuentre dentro de su jurisdicción, la protección igual de las leyes. Consagra así, la denominada *igualdad formal*, es decir, la igual protección de las leyes que no podrá negarse, por los Estados, a ninguna persona; sin embargo, ello no resuelve, por sí misma, los problemas planteados acerca de cuándo las leyes establecen desigualdades irrazonables pues, como ya se ha señalado, las normas pueden crear distinciones en el modo de tratar a diferentes personas o categorías de situaciones a ellas referidas. Ello resulta similar, por cierto, a las limitaciones que evidencia el art. 16 de nuestra Constitución Nacional cuando dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley.

Por consiguiente, al igual que se refiriera en párrafos anteriores, será necesario determinar qué criterios o pautas resultan necesarios aplicar a fin

³ Fallos: 340:1795

⁴ Conf. CSJN, GALINDEZ, NICOLAS EMANUEL c/ MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NACION s/AMPARO LEY 16.986; FSA 002445/2016/CS001; 09/11/2017; Fallos: 340:1581.

de garantizar el respeto por la Enmienda XIV y, al mismo tiempo, evitar discriminaciones odiosas.

En ese sentido, y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de aquel país, si bien la Enmienda citada nació como una garantía destinada a proteger a las personas de raza negra luego de abolida la esclavitud, su aplicación es extensiva a otras supuestos, sin perjuicio de reconocer –dijo el Máximo Tribunal- lo dificultoso que resulta fijar los límites razonables en cada caso.

Precisamente, como una herramienta tendiente a establecer los criterios mencionados, surge en la jurisprudencia de aquel país, la creación de las denominadas *categorías sospechosas*.

En efecto, las categorías sospechosas son aquellas que originan una discriminación que, *prima facie*, resulta de dudosa validez constitucional, cuando: a) *no se justifica estrictamente en un interés legítimo del Estado*, o; b) *están organizadas en base a la persecución de grupos que tradicionalmente fueron excluidos de los derechos o beneficios que reconocen u otorgan las leyes*, o; c) *estos grupos se encuentran relegados a una situación en la cual se los posterga sin término*.

Así, el Máximo Tribunal de los Estados Unidos ha sometido a un escrutinio estricto a esas categorías sospechosas, exigiendo la existencia de un interés suficientemente probado para sustentar la discriminación. Por lo tanto, la presencia de una categoría sospechosa, determina la inversión de la carga de la prueba, debiendo el legislador, en cada caso, justificar de manera estricta la diferencia practicada a fin de sortear la presunción de invalidez que la acompaña.⁵

Conjuntamente con las categorías sospechosas, la Corte también ha intensificado el control cuando la ley priva a una clase o grupo de personas

⁵ El caso más común se presenta cuando se reconocen o niegan los derechos con fundamento en la raza

de un derecho o interés fundamental; son derechos fundamentales aquellos que se encuentran explícita o implícitamente expresados en la Constitución.

Así, el estándar de control durante los años de la presidencia del juez Warren resultó más estricto al tiempo de convalidar las categorías legales. En efecto, durante su gestión, se extremó el control de constitucionalidad en materia de igualdad cuando estaban implicadas categorías sospechosas o en juego derechos fundamentales.

Como conclusión, puede afirmarse que el control de la Corte Suprema debe ser estricto, con una fuerte presunción de inconstitucionalidad, si la distinción para reconocer o negar un derecho a un grupo de personas está basada, por ejemplo, en la diferencia racial, o si a la categoría –aún la no sospechosa- se la priva de un derecho fundamental.

4. El derecho a la identidad y la garantía de la igualdad. Un desafío pendiente.

Tal como se señalara más arriba, el derecho a la identidad es un derecho fundamental, de tercera generación. Precisamente, la conceptualización del derecho a la identidad como un derecho fundamental, permite su configuración adecuada, al tiempo de analizar aquellas categorías jurídicas alcanzadas al tiempo de hacerlo efectivo.

De esta manera, las razones invocadas por el decreto 222/18, que autoriza la inscripción en sede administrativa de los mayores de edad, pero, con la condición de que pertenezcan a pueblos originarios, interpela el análisis de aquellos casos donde, ante situación de vulnerabilidad análoga a la expresada, otros grupos –indocumentados mayores- necesariamente deben acudir a un trámite judicial, que es caracterizado por el propio decreto como un obstáculo que vale la pena evitar.

En efecto, al cotejar la discriminación efectuada por el decreto en cuestión, con los estándares de igualdad reconocidos por la Corte Suprema de la Nación, como así también, a través del prisma que otorga la doctrina de las categorías sospechosas desarrollada por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, no se advierte la existencia de aquel plus en la motivación que cabe exigir para otorgar un privilegio a un grupo social determinado, en detrimento de otro en similares circunstancias.

Así, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el grupo social indicado en el decreto –pertenencia a un pueblo originario- **no se deriva estrictamente de aquella condición, sino de la imposibilidad de acreditar la identidad mediante la exhibición de la documentación correspondiente.**

Quiere ello decir que la vulnerabilidad del sector se configura ante la ausencia de satisfacción inmediata del derecho a la identidad, en tanto es tal circunstancia la que imposibilita el acceso a un sinnúmero de derechos y/o beneficios asistenciales.

Por lo tanto, así delimitada la situación de vulnerabilidad, correspondería extender los beneficios acordados por la norma (decreto 222/18) a todo el colectivo que enfrenta la misma imposibilidad; es decir, todos los indocumentados mayores de doce años.

Resta analizar, por cierto, cuál es el mecanismo más adecuado para salvaguardar la efectiva tutela del derecho a la identidad, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, verificando si existe o no una potestad normativa que permita resguardar adecuadamente la omisión incurrida por la norma nacional.

¿Puede el Registro Civil, mediante una disposición del Director General, extender los beneficios acordados por la norma nacional?
¿Corresponde acaso a la Legislatura de la Ciudad? ¿Involucra el tema cuestiones de ciudadanía que están excluidas de las atribuciones locales y es propia del Congreso Nacional?

Como se advierte, no basta sólo con identificar la problemática y efectuar el adecuado encuadre jurídico sustantivo. Es necesario, además, disponer las herramientas pertinentes para hacer efectivos los derechos.

No cabe olvidar, en este punto, que la Argentina se comprometió a modificar su ordenamiento interno a fin de hacer efectivas las garantías contenidas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El desafío pendiente es, pues, determinar la manera más eficiente de tutelar este derecho fundamental, indefinidamente postergado para todos los indocumentados mayores.